Poder Judicial del Estado de Tabasco

“2020, Año del Caudillo del Sur Emiliano Zapata”

SENTENCIA DEFINITIVA

**JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL
SEXTO DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO H. CÁRDENAS,
TABASCO, VEINTE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTE.**

Para resolver en definitiva los autos del expediente número 478/2019, relativo al Procedimiento Judicial No Contencioso de Adopción Plena, promovida por los señores *****

R E S U L T A N D O

1. El diecinueve de junio de dos mil diecinueve, los señores ***** , presentaron ante la Oficialía de parte común de este distrito judicial, un escrito a través del cual solicitan la adopción plena de la menor de edad a quien se le resguarda su identidad bajo las iniciales A.J.N.F., la que se admitió a trámite el veinte de junio de dos mil diecinueve, en el que se ordenó entre otras cosas dar vista al ciudadano Fiscal del Ministerio Público Adscrito a este Juzgado y al Representante del Sistema para el Desarrollo Integral

de la Familia de esta localidad, e igualmente se ordenó la ratificación de la solicitud de adopción a cargo de los promoventes.

2. Por diligencia del nueve de agosto de dos mil diecinueve, los ciudadanos RODELMAR CANCINO LEÓN y AUREA ELENA DOMÍNGUEZ SOTO, ratificaron su escrito donde solicitan la adopción plena de la menor de edad a quien se le resguarda su identidad bajo las iniciales A.J.N.F.

3. El cinco de diciembre de dos mil diecinueve, se señaló fecha y hora para el desahogo de la prueba testimonial a cargo de los testigos propuestos, la que se desahogó el siete de febrero de dos mil veinte, con los resultados visibles en autos, y, se citó a los interesados para oír sentencia.

4. El once de febrero de dos mil veinte, se dictó auto para mejor proveer, dándose vista al Fiscal del Ministerio Público adscrito a este Juzgado, para que manifestará dentro del término de tres días si otorgaba su consentimiento para la adopción de la menor de edad de identidad reservada bajo las iniciales A.J.N.F., dando contestación a la vista por escrito de fecha diecisiete de febrero de dos mil veinte.

5. Por auto del diecinueve de febrero de dos mil veinte, se designó como tutor de la menor de edad de identidad reservada

bajo las iniciales A.J.N.F., al Procurador de la Defensa del Menor, la Familia y Asuntos Jurídicos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de esta Ciudad, quien protestó el cargo mediante diligencia del tres de agosto de dos mil veinte.

6. El tres de agosto de dos mil veinte, se citó a las partes para oír sentencia definitiva, misma que hoy se pronuncia, y:

C O N S I D E R A N D O

I. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo señalado por los artículos 24, fracción I, y 28 fracción VIII párrafo segundo del Código de Procedimientos Civiles en vigor y 47 fracción I de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

II. Los señores R***** solicitan la ADOPCIÓN PLENA de la menor de identidad reservada bajo las iniciales A.J.N.F., fundando su petición en los hechos que en síntesis se exponen:

- **Que se encuentran legalmente casados.**
- **Que tiene su domicilio conyugal en el andador tordos, departamento número 101, manzana L, lote 6, Colonia infonavit Deportiva, de la ciudad de Cárdenas, Tabasco.**

- **Que la menor de edad que desean adoptar, se encuentra bajo su cuidado desde la fecha que falleció su progenitora KENIA JANETH FARRERA BENÍTEZ.**
- **Que el progenitor de la menor de edad JOEL NÚÑEZ MONTEJO, también fue privado de la vida.**
- **Que la menor de edad, en la actualidad padece de insuficiencia renal y necesita atención médica urgente.**
- **Que ellos pueden proporcionarle el servicio médico que la menor necesita.**
- **Que cuentan con los medios económicos suficientes para proveer de la subsistencia adecuada a la menor de edad.**

ESTUDIO DE FONDO DE LA SOLICITUD DE ADOPCIÓN

III. Cabe mencionar que la adopción plena, implica la ruptura del vínculo de filiación preexistente entre el adoptado y su familia biológica, a fin de establecer lazos equivalentes a los biológicos con la familia de los adoptantes, por lo que el adoptado debe gozar en el Estado de recepción de los mismos derechos y obligaciones del parentesco consanguíneo con los familiares de sus padres por adopción.

La Declaración Universal de Derechos Humanos las Naciones Unidas proclamaron que la infancia tiene derecho a cuidados y asistencia especiales; que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión, y en particular, educado en un espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad.

IV. Así también es de tomarse en consideración, lo pronunciado en la referida convención de que en todos los países del mundo hay niños que viven en condiciones excepcionalmente difíciles y que esos niños necesitan especial consideración, como es el derecho a ser adoptados, como que el niño por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento, como también es de tomarse en consideración lo establecido en el punto 2 y 3 del artículo 20 de dicha convención, en los que disponen que los Estados Partes garantizarán, de conformidad con sus leyes nacionales, otros tipos de cuidado para esos niños. Entre los que figuran, entre otras cosas, la adopción o de ser necesario, la colocación en instituciones adecuadas de protección de menores.

La adopción solicitada se encuentra regulada por el Código Civil vigente en el Estado de Tabasco, en los numerales 398 al 403, en relación con el artículo 729 y 730 del Código Procesal Civil en vigor, que en su orden disponen:

398. Efectos Por la adopción plena el adoptado se incorpora a una familia como hijo legítimo confiriéndole los apellidos de los adoptantes y los mismos derechos, obligaciones y parentesco que la filiación consanguínea.

399.- Requisitos Para que la adopción plena tenga lugar se requiere: I.- Que los adoptantes sean un varón y una mujer casados entre sí o que vivan públicamente como marido y mujer, sin tener ningún impedimento para contraer matrimonio entre sí; II.- Los adoptantes deben tener como mínimo cinco años de vivir como marido y mujer; III.- Que el menor a adoptar no tenga más de cinco años de edad, se trate de un niño abandonado o de padres desconocidos, o sea pupilo en casa de cuna o instituciones similares, o sea producto de un embarazo logrado como consecuencia del empleo de inseminación artificial o fertilización in vitro con la participación de una madre sustituta que haya convenido con los presuntos padres darlo en adopción; IV.- Que los adoptantes tengan medios bastantes para proveer a la

formación y educación integral del adoptado; y V.- La adopción debe fundarse sobre justos motivos y presentar siempre ventajas para el adoptado.

400. La edad a que se refiere la fracción III del artículo anterior, puede ser dispensada por los Tribunales cuando circunstancias especiales lo aconsejen.

401. Quiénes deberán consentir Para que la adopción plena tenga lugar deberán consentir en ella, en sus respectivos casos, la persona o personas quienes por la ley ejercen la patria potestad; el tutor del que se va a adoptar o la persona que lo haya acogido durante seis meses y lo trate como hijo, cuando no hubiere quién ejerza la patria potestad sobre él ni tenga tutor. Tratándose de hijos expósitos o abandonados, el consentimiento lo dará el Ministerio Público. Si el tutor o el Ministerio Público no consienten, deberán expresar la causa en que se fundan, la que el Juez calificará tomando en cuenta los intereses del menor.

402.- La sentencia que apruebe la adopción plena, una vez que cause estado, confiere al adoptado un nuevo estado civil que no podrá ser contradicho por persona alguna.

403.- Efectos Los efectos principales de la adopción plena son: I.- La extinción del lazo jurídico con la familia consanguínea,

excepto en lo que respecta a la prohibición de matrimonio; II.- El adoptado pasa a ser un miembro más en la familia del adoptante como si fuese hijo biológico; y III.- Confiere al adoptado, respecto de la familia del adoptante, los mismos derechos y obligaciones que si hubiera nacido de matrimonio y viceversa, creando un verdadero lazo de parentesco.

729. El que pretenda adoptar, deberá acreditar los requisitos señalados en el Código Civil. En la promoción inicial deberá manifestar el nombre y edad del menor o incapacitado, y el nombre y domicilio de quienes ejerzan sobre él la patria potestad o la tutela, o de las personas o institución pública que lo haya acogido; debiendo acompañar un estudio médico, psicológico y socioeconómico, tanto de los adoptantes como del menor que se pretenda adoptar, realizado por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. Las pruebas pertinentes se recibirán sin dilación en cualquier día y hora hábil. La solicitud de adopción a que se refiere este artículo deberá ser suscrita en forma personal por el interesado, debiendo el juzgador ordenar la ratificación de la misma, en su presencia, sin cuyo requisito no se le dará trámite. Tampoco se le deberá dar trámite a las solicitudes que vengan suscritas por apoderados o representante legal del interesado. Los

infractores de esta disposición, serán destituidos de su cargo, sin responsabilidad para el Tribunal Superior de Justicia. Cuando el menor hubiere sido acogido por una institución pública, el adoptante, recabará constancia del tiempo de la exposición o abandono. Si hubieren transcurrido menos de seis meses de la exposición o abandono, se decretará el depósito del menor con el presunto adoptante, entretanto se consuma dicho plazo. Si el menor no tuviere padres conocidos y no hubiere sido acogido por institución pública, se decretará el depósito con el presunto adoptante, por el plazo de seis meses para los mismos efectos.

730.- Rendidas las justificaciones que se exigen en el artículo anterior y obtenido el consentimiento de las personas que deban darlo conforme al Código Civil, el Juez de primera instancia resolverá dentro del tercer día lo que proceda sobre la adopción.

V. Los solicitantes para acreditar los requisitos que exige el artículo 399 del Código Civil citado, desahogó las siguientes probanzas:

1. DOCUMENTALES PÚBLICAS. Consistente en:

a) Copia certificada del acta de matrimonio número 0351, asentada en el libro 02, con fecha de registro seis de abril de mil novecientos noventa y dos, expedida por el Oficial 01 del Registro

Civil de Coatzacoalcos, estado de Veracruz Ignacio de la Llave, visible a foja 10 de autos, con la que se acredita que los señores **RODELMAR CANCINO LEÓN** y **AUREA ELENA DOMÍNGUEZ SOTO**, contrajeron matrimonio civil el seis de abril de mil novecientos noventa y dos, ante la Oficialía 01 del Registro Civil de Coatzacoalcos, estado de Veracruz Ignacio de la Llave.

b) Copia certificada del acta de nacimiento número 427, asentada en el libro 01, con fecha de registro veintiuno de abril de mil novecientos ochenta y uno, expedida por el Oficial 01 del Registro Civil del municipio de San Juan Evangelista, del estado de Veracruz, con la que se acredita que la señora ********* nació el veintiuno de diciembre de mil novecientos setenta y tres, ante la Oficialía 01 del Registro Civil de San Juan Evangelista, del estado de Veracruz, por lo que a la fecha cuenta con 47 años de edad.

c) Copia certificada del acta de matrimonio número 164, asentada en el libro 1-2, con fecha de registro veinte de enero de mil novecientos setenta, expedida por el Oficial 01 del Registro Civil de Coatzacoalcos, estado de Veracruz Ignacio de la Llave, con la que se acredita que el señor ********* nació el treinta de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, por lo que a la fecha cuenta con 50 años de edad.

d) Copia certificada del acta de nacimiento número 2585, asentada en el libro 11, con fecha de registro cinco de junio del dos mil catorce, expedida por el Oficial 01 del Registro Civil de Coatzacoalcos, estado de Veracruz Ignacio de la Llave, con la que se acredita que la menor de edad a quien se le resguarda su identidad bajo las iniciales A.J.N.F. nació el veintidós de mayo de dos mil catorce, y a la fecha cuenta con seis años de edad y es hija biológica de los ciudadano ***** pues en el renglón de padres de la referida acta aparecen registrados sus nombres.

e) Copia certificada del acta de defunción 01277, asentada en el libro 06, con fecha de registro quince de julio de dos mil diecisiete, expedida por el Oficial 01 del Registro Civil de Coatzacoalcos, estado de Veracruz Ignacio de la Llave, con la que se acredita que el fallecimiento del extinto JOEL NÚÑEZ MONTEJO, el día trece de julio del dos mil diecisiete a causa de heridas de proyectil de arma de fuego cráneo tórax y abdomen con lesión de contenido.

f) Copia certificada del acta de defunción 00657, asentada en el libro 03, con fecha de registro diez de abril de dos mil diecisiete, expedida por el Oficial 01 del Registro Civil de Coatzacoalcos, estado de Veracruz Ignacio de la Llave, con la que

se acredita que el fallecimiento de la extinta *****, el día nueve de abril del dos mil diecisiete a causa de herida producida por proyectil de arma de fuego penetrante abdomen con lesión de contenido, hemorragia profusa y anemia aguda.

g) Tres valoraciones psicológicas realizados por la licenciada ***** (Procuraduría Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes) del DIF MUNICIPAL Cárdenas, Tabasco, visibles a fojas de la 28 a la 36 de autos; con los que se acredita que los promoventes (adoptantes), y la menor de edad a quien se les guarda su identidad bajo las iniciales A.J.N.F., se encuentran emocionalmente estables, y en los que se sugiere se lleve a cabo el proceso de adopción donde la menor tendrá los cuidados adecuados y respectivo a su edad para un sano desarrollo físico y mental.

h) Valoración médica de la menor de edad que se pretende adoptar, expedida por la Doctora FLOR DE LIZ VELÁZQUEZ SÁNCHEZ, Adscrita a la Secretaria de Salud, en la que refiere que es la niña es portadora de HIDRONEFROSIS LEVE A MODERADA DERECHA, SECUNDARIO A URETEROCELE IL.

i) Estudios Socioeconómicos y Trabajo Social, realizados a los promoventes *****, realizados por la trabajadora

***** Adscrita a la PROFADE (Procuraduría Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes) del DIF MUNICIPAL Cárdenas, Tabasco, en el que se hace constar el estado económico y solvencia de los solicitantes.

j) Tres certificados de salud a favor de los promoventes y la menor de edad que pretenden adoptar, expedidos por la Doctora CINTYA SUSANA RAMÍREZ DEL ÁNGEL, Gestor Médico del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Municipal Cárdenas, Tabasco, donde refiere que los antes mencionados se encuentran clínicamente sanos.

Documentales a la que de conformidad con los artículos 269 fracción III y 319 del Código Procesal Civil en vigor, se les concede valor probatorio pleno, por ser documentos públicos expedidos por funcionarios en ejercicio de una función propia de su cargo, además de que no fueron objetadas ni redargüidas de falsas por ninguna de las partes interesadas.

2. TESTIMONIAL, a cargo *****, con los resultados visibles en de autos. Probanza que de conformidad con el numeral 318 del Código Procesal Civil en Vigor, se le otorga valor probatorio pleno, pues los testigos dieron razón fundada de su dicho y expusieron las circunstancias del modo, tiempo y lugar

en que ocurrieron los hechos que declararon, además de que resultaron conocedores directos de los hechos sobre los que depusieron, y no existe prueba que contradiga sus declaraciones.

Cabe mencionar que en el presente caso los adoptantes ratificaron ante la presencia judicial la solicitud de adopción.

De igual manera, se acreditó el fallecimiento de los padres biológicos de la menor que se pretende adoptar con las copias certificadas de las actas de defunción la primera número 01277, asentada en el libro 06, con fecha de registro quince de julio de dos mil diecisiete, expedida por el Oficial 01 del Registro Civil de Coatzacoalcos, estado de Veracruz Ignacio de la Llave, con la que se acredita que el fallecimiento del extinto JOEL NÚÑEZ MONTEJO, el día trece de julio del dos mil diecisiete a causa de heridas de proyectil de arma de fuego cráneo tórax y abdomen con lesión de contenido; la segunda número 00657, asentada en el libro 03, con fecha de registro diez de abril de dos mil diecisiete, expedida por el Oficial 01 del Registro Civil de Coatzacoalcos, estado de Veracruz Ignacio de la Llave, con la que se acredita que el fallecimiento de la extinta *****, el día nueve de abril del dos mil diecisiete a causa de herida producida por proyectil de

arma de fuego penetrante abdomen con lesión de contenido, hemorragia profusa y anemia aguda.

Por lo que, al efecto mediante auto del once de febrero de dos mil veinte, se ordenó dar vista al Fiscal del Ministerio Público adscrito a este Juzgado, conforme al numeral 385 fracción IV del Código Civil vigente en el Estado de Tabasco, que a la letra dice: *"...Quienes deben consentirla. IV. El Ministerio Público del lugar del domicilio del adoptado, cuando este no tenga padres conocidos, ni tutor, ni persona que ostensiblemente le imparte su protección y lo haya acogido como su hijo. Si el menor que se adoptar tiene más de doce años, también se necesita su consentimiento para la adopción..."*. Dando contestación a la misma la licenciada *****, Fiscal del Ministerio Público adscrito a este Juzgado, mediante oficio número FGE/DCP/MPA/12/2020, de fecha diecisiete de febrero del dos mil veinte, mediante el cual pidió que se solicitará el consentimiento de la abuela materna de la menor de edad de identidad reservada bajo las iniciales A.J.N.F. de nombre ***** quien como se advierte de la audiencia testimonial desahogada el siete de febrero de dos mil veinte, resultó ser testigo de los promoventes y manifestó entre otras cosas a los promoventes de este juicio

porque ella vivía por allá, en la colonia Guadalupe Victoria, de Coatzacoalcos, Veracruz, y en segunda porque fueron los suegros de su hija Kenia Janeth Farrera Benítez, ya que su hija se junto con Luis Cancino, hijo de doña Aury y don Rodelmar, y que mi hija con Luis no tuvieron hijos, que su hija Kenia Janeth Farrera Benítez y Luis Cancino, vivieron en la calle Rivas Palacios sin número, colonia Guadalupe Victoria, de Coatzacoalcos, Veracruz, en el cual vivieron más de cuatro años, en compañía de doña Aury, Rodelmar, y su nieta de identidad reservada bajo las iniciales A.J. N.F., quien vive actualmente en andador Tordos, departamento 101, manzana I, lote 6, de infonavit Deportiva, de H. Cárdenas, Tabasco, en compañía de doña Aury y don Rodelmar, teniendo tres años de vivir en ese domicilio, después de la muerte de su hija el nueve de abril de dos mil diecisiete, dando como razón de su dicho: "...porque conozco a los promoventes de este juicio, desde hace diez años, se que ellos están cuidando a su nieta A.J., y viven aquí en esta ciudad, por seguridad de la niña, ya que ella tiene una enfermedad de sus riñones y doña Aury y don Rodelmar, pueden darle esa ayuda que ella necesita...".

Por lo anterior, este Juzgador consideró que resultaba ocioso llamar a la señora MARÍA GUADALUPE BENÍTEZ PALACIOS (abuela materna de la menor que se pretende adoptar).

También se advierte de autos, que por auto del diecinueve de febrero de dos mil veinte, se designó como tutor de la menor de edad de identidad reservada bajo las iniciales A.J.N.F., al Procurador de la Defensa del Menor y la Familia y Asuntos Jurídicos del DIF, Cárdenas, Tabasco, licenciado ***** quien protestó el cargo por diligencia del tres de agosto de dos mil veinte, y manifestó por escrito del dos de agosto del año antes citado: "...que no tiene objeción en que se decrete la adopción de la menor materia de este asunto, toda vez que por el interés superior de dicha menor y en virtud de que esta se encuentra enferma y necesita servicios médicos que sus padres adoptivos le van a proporcionar, es por tal motivo que dicha adopción se decrete a la brevedad posible. ...".

VI. Del análisis a los planteamientos de hechos que refieren los promoventes en su solicitud de adopción, al material probatorio desahogado en autos, este tribunal considera que los promoventes *****, acreditaron los elementos que para la procedencia de la adopción plena, exigen los artículos 399 al 403 del Código

civil, en relación con el artículo 729 al 730 del Código Procesal Civil, ambos vigentes en el Estado, al quedar demostrado que los solicitantes de la adopción son un varón y una mujer casados entre sí; que la niña a adoptar actualmente tiene seis años de edad, tal y como lo acreditan con su partida de nacimiento, pero que los promoventes la tienen bajo su cuidado y protección, y que tienen los medios suficientes para proveer a la subsistencia y educación de la menor, tal como quedó acreditado con el estudio socio económico que se realizó a los promoventes, así como la prueba testimonial, pues los testigos al responder a la pregunta cuarta directa que se les formuló coincidieron al declarar que la menor vive con los promoventes, quienes las tienen bajo su cuidado y protección.

De igual manera, también queda probado que los adoptantes se encuentran bien de salud tanto física como mental o emocionalmente; que estos son un matrimonio formado por un varón y una mujer, quienes cumplen con los deberes que nacen del matrimonio, como es la convivencia y la ayuda mutua.

Así también, este tribunal considera que la adopción es benéfica para la menor, pues a decir de los testigos la menor vive con los promoventes desde que vivía su progenitora; y que

después de su fallecimiento son los que les han brindado cuidados y atenciones y la han cuidado como si fuera su hija, pues así se deduce de las declaraciones que hicieron los testigos al ser interrogados en este juicio.

Aunado a que, en el estudio socioeconómico del promovente (cónyuge varón), se hace constar que este, tiene ingresos de quince mil pesos mensuales, suma que este tribunal considera suficiente para poder dar una adecuada alimentación a la menor y proveer de sus demás necesidades; así también, de la testimonial desahogada quedó probado que los adoptantes son casados civilmente, él es trabajador jubilado de PEMEX y la promovente ama de casa.

Además, tomando en cuenta los artículos 1ro., 4ro., párrafos octavo, noveno y décimo; de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que transcritos a la letra dice:

“Artículo 1o. *En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.*

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley (...).

Artículo 4o. *(...) En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.*

Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios.

El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez.

De la interpretación a los citados artículos se obtiene, que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;

que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la ley suprema y con los pactos internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Por tanto todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Los niños tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud y sano esparcimiento para su desarrollo integral e impone a sus ascendientes, tutores y custodios la obligación de velar por la preservación de esos derechos; incluso, se fija al Estado, como mandato de optimización, tomar las acciones conducentes para propiciar el respecto a la dignidad infantil y el pleno ejercicio de sus derechos, con base en el principio de interés superior del menor garantizando de manera plena sus derechos.

Lo anterior implica que en todo momento las políticas, acciones y toma de decisiones relacionadas con esta etapa de la vida humana, tendrán que realizarse de tal manera que, en primer

término, se busque el beneficio directo del niño a quien van dirigidas.

Esto es, en virtud del principio relativo al interés superior de la niñez, debe darse prioridad al bienestar de los infantes ante cualquier otro interés que vaya en su perjuicio.

Ahora bien, es importante precisar que la Constitución, los tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano, las leyes generales y la doctrina, así como la jurisprudencia, establecen como premisa fundamental, velar por el **interés superior del menor**, como principio básico de la actividad interpretativa relacionada con cualquier norma jurídica que debe aplicarse a un niño, tomando en cuenta los deberes de protección hacia éstos, de modo que la labor del juez implica un escrutinio estricto de la necesidad y la proporcionalidad de las medidas que deban emplearse.

Asimismo, es criterio uniforme de las fuentes normativas y jurisprudencias sustentadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es una cuestión de orden público y necesidad prioritaria, asegurar el pleno desarrollo del niño y su identidad con el seno familiar.

Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos al emitir la opinión consultiva **OC-17/2002**, de veintiocho de agosto de dos mil dos, en los títulos VII y VIII, relativos al "interés superior del niño", y "deberes de la familia, la sociedad y el Estado", estableció en los puntos cincuenta y seis, y sesenta, que este principio regulador de la normativa de los derechos del niño se funda en la dignidad misma del ser humano, en las características propias de los niños y en la necesidad de propiciar su desarrollo, con pleno aprovechamiento de sus potencialidades, así como en la naturaleza y alcances de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Es por ello que el niño tiene derecho a vivir con su familia, llamada a satisfacer sus necesidades materiales, afectivas y psicológicas, esto es, a recibir protección contra injerencias arbitrarias o ilegales de su familia, expresamente reconocido en los numerales 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; V de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 11.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y, 8 de la Convención Europea de Derechos

Humanos, los cuales son de la literalidad siguientes respectivamente:

"Artículo 1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques".

"Artículo V. Toda persona tiene derecho a la protección de la Ley contra los ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada y familiar".

"ARTÍCULO 17.

1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación.

2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques".

"ARTÍCULO 11.- Protección de la Honra y de la Dignidad.

(...) 2. Nadie puede ser objeto de ingerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación. (...)"

"ARTÍCULO 8 Derecho al respeto a la vida privada y familiar.

1. Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia".

2. No podrá haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este derecho sino en tanto en cuanto esta injerencia esté prevista por la ley

y constituya una medida que, en una sociedad democrática, sea necesaria para la seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa del orden y la prevención de las infracciones penales, la protección de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y las libertades de los demás”.

Por lo que cualquier decisión relativa a los derechos del niño, debe estar justificada atendiendo al **interés superior del menor**.

En ese tenor, la Convención sobre los Derechos del Niño en sus artículos 3, 12, 19, 20 y 27, establecen los siguientes conceptos:

"ARTÍCULO 3 1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. 2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas. 3 Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en

materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada”.

“ARTÍCULO 12 - 1. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño. 2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional”.

“ARTÍCULO 19- 1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo. 2. Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como para otras formas de prevención y para la identificación, notificación, remisión a una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos antes descritos de malos tratos al niño y, según corresponda, la intervención judicial”.

"ARTÍCULO 20- 1. Los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar, o cuyo superior interés exija que no permanezcan en ese medio, tendrán derecho a la protección y asistencia especiales del Estado. 2. Los Estados Partes garantizarán, de conformidad con sus leyes nacionales, otros tipos de cuidado para esos niños. 3. Entre esos cuidados figurarán, entre otras cosas, la colocación en hogares de guarda, la kafala del derecho islámico, la adopción, o de ser necesario la colocación en instituciones adecuadas de protección de menores. Al considerar las soluciones, se prestará particular atención a la conveniencia de que haya continuidad en la educación del niño y a su origen étnico, religioso, cultural y lingüístico".

"ARTÍCULO 27- 1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. - 2. A los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe la responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para el desarrollo del niño (...)".

Dicho tratado internacional ha sido ratificado por nuestro país, y en él, se ha establecido el deber primordial del Estado mexicano para vigilar y respetar el interés superior del menor en cualquier decisión que tomen los tribunales; el respecto a los derechos del niño; la garantía que debe prestar el Estado al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que le

afecten, teniéndose debidamente en cuenta sus opiniones en función de su edad y madurez, por lo que el niño debe tener la oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que le afecte, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional.

En armonía con los citados preceptos constitucionales e instrumento internacional, la ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del estado de Tabasco, en sus artículos 1, 2, 3, 6, 7, 8, 12, 62, 63, 64 y 65 establecen lo siguiente:

"Artículo 1.- La presente Ley es de orden público, interés social y observancia general en el territorio del Estado de Tabasco y tiene por objeto: I. Reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos humanos de conformidad con los principios establecidos en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; II. Garantizar en el Estado de Tabasco el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de la materia de los que el Estado Mexicano forma parte; en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; la Constitución local y en esta Ley; III. Crear y regular la integración, organización y adecuado funcionamiento del Sistema Estatal de Protección Integral de los Derechos de

Niñas, Niños y Adolescentes, a efecto de que el Estado de Tabasco cumpla con su responsabilidad de garantizar en su ámbito de competencias la protección, prevención y restitución integrales de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que hayan sido vulnerados; IV. Cumplir con los principios rectores y criterios señalados en la Constitución General de la República, la Ley General y la Constitución local, que orientarán la política estatal en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes; así como desarrollar las facultades, y competencias que corresponden al Estado de Tabasco y a sus municipios en la promoción y/o protección de los derechos; y la actuación de los Poderes Legislativo y Judicial, y los organismos constitucionales autónomos; y V. Promover, en el marco de facultades de las autoridades estatales en la materia, la participación de los sectores privado y social en las acciones tendientes a garantizar la 8 protección y el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes en el Estado de Tabasco, así como prevenir su vulneración”.

"Artículo 2.- Para garantizar la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, las autoridades estatales y municipales realizarán las acciones y tomarán las medidas necesarias, de conformidad con los principios establecidos en la Ley General y en la presente Ley. Para tal efecto, deberán:

I. Garantizar un enfoque integral, transversal y con perspectiva de derechos humanos en el diseño y la instrumentación de políticas públicas y programas estatales; II. Promover la participación, tomar en cuenta la opinión y considerar los aspectos culturales, éticos, afectivos, educativos y de salud de niñas, niños y adolescentes, en todos aquellos asuntos de su incumbencia, de

acuerdo a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez; y III. Establecer mecanismos transparentes de seguimiento y evaluación de la implementación de políticas públicas, programas gubernamentales, legislación y compromisos derivados de tratados internacionales en la materia.

Todas las autoridades del Estado de Tabasco deberán considerar, de manera primordial, el interés superior de la niñez en la toma de decisiones, sobre una cuestión debatida que involucre derechos de niñas, niños y adolescentes.

Cuando se presenten diferentes interpretaciones, se elegirá la que satisfaga de manera más efectiva este principio rector.

Cuando se tome una decisión que afecte a niñas, niños o adolescentes, en lo individual o en lo colectivo, se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones que ello tenga, a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales, en su caso.

Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán incorporar en sus proyectos de presupuesto, la asignación de recursos que permitan dar cumplimiento a las acciones establecidas por la presente Ley y demás normatividad aplicable”.

“ Artículo 3.- Todos los entes públicos del Estado de Tabasco y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligados al cumplimiento del objeto de esta Ley, para el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas públicas en materia de ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como para

garantizar su máximo bienestar posible, privilegiando su interés superior a través de medidas estructurales, legales, administrativas y presupuestales.

Las políticas públicas estatales y municipales deberán contribuir a la formación física, psicológica, económica, social, cultural, ambiental y cívica de niñas, niños y adolescentes (...)”.

Artículo 6.- A fin de garantizar la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, las autoridades estatales y municipales se regirán y aplicarán la presente Ley, de conformidad con los siguientes principios rectores:

I. El interés superior de la niñez;

II. La universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad e integralidad de los derechos de niñas, niños y adolescentes, conforme a lo dispuesto en los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los tratados internacionales;

III. La igualdad sustantiva;

IV. La no discriminación;

V. La inclusión;

VI. El derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo;

VII. La participación;

VIII. La interculturalidad;

IX. La corresponsabilidad de los miembros de la familia, la sociedad y las autoridades;

X. La transversalidad en la legislación, políticas públicas, actividades administrativas, económicas y culturales;

- XI. La autonomía progresiva;*
- XII. El principio pro persona;*
- XIII. El acceso a una vida libre de violencia; y*
- XIV. La accesibilidad”.*

”Artículo 7.- Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, impulsarán una cultura de respeto, promoción y protección de derechos de niñas, niños y adolescentes basada en los principios rectores de la Ley General y de esta Ley, a través de la ejecución de las acciones coordinadas que para tal efecto se establezcan en el Programa Estatal y los Programas Municipales respectivos”.

”Artículo 8.- A falta de disposición expresa en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales, en la Ley General, en la Constitución local, en esta Ley o en el derecho por jurisprudencia vinculante en el Estado de Tabasco, y demás disposiciones aplicables, se estará a los principios generales que deriven de dichos ordenamientos y a falta de éstos, a los principios generales del derecho; privilegiando en todo momento los principios rectores de esta Ley. (...)”.

”Artículo 12.- Para efectos de la presente Ley, en términos de lo previsto por la Ley General, son derechos de niñas, niños y adolescentes, de manera enunciativa más no limitativa, los siguientes:

- I. Derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo;*
- II. Derecho de prioridad;*
- III. Derecho a la identidad;*
- IV. Derecho a vivir en familia;*

- V. Derecho a la igualdad sustantiva;*
- VI. Derecho a no ser discriminado;*
- VII. Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral;*
- VIII. Derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal;*
- IX. Derecho a la protección de la salud y a la seguridad social;*
- X. Derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad;*
- XI. Derecho a la educación;*
- XII. Derecho al descanso y al esparcimiento;*
- XIII. Derecho a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura;*
- XIV. Derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información;*
- XV. Derecho de participación;*
- XVI. Derecho de asociación y reunión;*
- XVII. Derecho a la intimidad;*
- XVIII. Derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso; y*
- XIX. Derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet, en términos de lo previsto en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.*

Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, adoptarán las medidas necesarias para garantizar estos derechos a todas las niñas, niños y adolescentes sin discriminación de

ningún tipo o condición, a través de la ejecución de las acciones coordinadas que para el efecto se establezcan en el Programa Estatal y los Programas Municipales respectivos.

Las niñas, niños y adolescentes migrantes, gozarán a plenitud de los derechos comunes que en su condición de menores establecen la Ley General y la presente Ley. En atención a su condición especial de migrantes, gozarán además de los derechos y serán acreedores de las medidas especiales de protección que las autoridades, en sus respectivos ámbitos de competencia, deberán adoptar para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes.

(...)”.

“Artículo 62.- Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a ser escuchados y tomados en cuenta en los asuntos de su interés, conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez”.

“Artículo 63.- Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligados a disponer e implementar los mecanismos que garanticen la participación permanente y activa de niñas, niños y adolescentes en las decisiones que se toman en los ámbitos familiar, escolar, social, comunitario o cualquier otro en el que se desarrollen”.

“Artículo 64.- Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a participar, a ser escuchados y tomados en cuenta en todos los procesos judiciales y de procuración de justicia, donde se diriman controversias que les afectan, en los términos señalados por el Capítulo Décimo Octavo”.

"Artículo 65.- Las autoridades estatales y municipales informarán de manera adecuada y comprensible a los niños, niñas y adolescentes en qué manera su opinión fue valorada y tomada en cuenta, y las opciones de actuación que tiene tras la decisión de la autoridad pública".

Dichos preceptos regulan primordialmente el interés, superior de los menores y garantizan el respeto a sus derechos; además, el **principio de interés superior del niño** es uno de los principios, rectores más importantes del marco internacional de los derechos del niño, y no solo es mencionado expresamente en varios instrumentos internacionales, sino que es constantemente invocado por diversos órganos; luego, es de considerarse que en toda contienda en que se vean involucrados derechos inherentes a los menores, deberá resolverse atendiendo a este principio básico.

Aquí es importante y necesario puntualizar que el **principio del interés superior del menor**, se entiende como un catálogo de valores, principios, interpretaciones, acciones y procesos dirigidos a forjar un desarrollo humano integral y una vida digna, y el desarrollo normal de un menor, que se produce siempre que el entorno de éste le permita u otorga la posibilidad, en atención a sus capacidades tanto físicas, como mentales, para su preparación a una vida independiente en sociedad, con una

percepción de respeto en razón a los derechos que le asisten a los demás; circunstancias que son posibles cuando se garantizan sus derechos a la vida, integridad física y mental, salud, identidad, familiar, convivencia con sus padres, socialidad, comprensión en razón de sus aptitudes, físicas y mentales, libre de expresión de sus ideas dentro del marco de la moral y buenas costumbres, educación, información, desarrollo psicosexual correlativo a su edad, juego y esparcimiento, experiencia estéticas y artísticas y libertades de conciencia y religión.

En el ámbito jurisdiccional, el interés superior del niño es un principio orientador de la actividad interpretativa relacionada con cualquier norma jurídica que tenga que aplicarse a un niño en un caso concreto o que pueda afectar sus intereses, el cual, ordena la realización de una interpretación sistemática que para darle sentido a la norma, toma en cuenta los deberes de protección de los menores y los derechos especiales previstos en la Constitución, tratados internacionales y leyes de protección de la niñez, por lo que corresponde al Juez atender al mayor beneficio del menor, valorando todos los elementos que tenga a su alcance.

Es aplicable al caso, la jurisprudencia de la Décima Época, con registro digital: 159897, Instancia: Primera Sala,

Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 1, Materia (s): Constitucional, Tesis: 1a./J.25/2012 (9ª). Página: 334. De título: **“INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONCEPTO”**.

Así como la diversa jurisprudencia de la Novena Época, con registro digital: 162562, del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, Materia (s): Civil, Tesis I 5o .C. J/16, Página 2188, de rubro: **“INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONCEPTO”**.

VII. Consecuentemente, advirtiéndose del oficio número HGC/DIR/02227/2019, signado por la Doctora María del Rocío Cruz Martínez, Directora del Hospital General de Cárdenas, por medio del cual anexa copia fotostática de la nota médica e indicaciones a nombre de la menor de edad de identidad reservada bajo las iniciales A.J.N.F., donde refiere que la menor es portadora de **HIDRONEFROSIS LEVE A MODERADA, SECUNDARIO A VETEROCELE**, así como que los promoventes **ROLDEMAR CANCINO LEÓN** y **AURA ELENA DOMÍNGUEZ SOTO**, cuentan con los medios suficientes para proporcionarle el servicio médico que la menor requiere tal y como se advirtió de los estudios socioeconómicos

que corren agregados a los autos y el desahogo de la prueba testimonial a cargo de los ciudadanos *****, aunado al hecho de que la última de las citadas resultó ser la abuela materna de la menor y al comparecer como testigo manifestó conocer a los promoventes quienes están cuidando a su nieta y pueden darle la ayuda que ella necesita, así como la manifestación de la Fiscal del Ministerio Público adscrita a este Juzgado licenciada ***** en el oficio número FGE/DCP/MPA/12/2020, de fecha diecisiete de febrero del dos mil veinte, respecto a que no tiene oposición que hacer valer en relación a la adopción plena, y finalmente la manifestación del tutor de la menor de edad, licenciado ***** en su escrito fecha dos de agosto de dos mil veinte, en donde señala que no tiene objeción en que se decrete la adopción de la menor materia de este juicio, y no obstante a que la menor de edad de identidad reservada bajo las iniciales A.J.N.F., actualmente cuente con seis años, dos meses de edad, dicha edad puede ser dispensada por los Tribunales cuando circunstancias especiales lo aconsejen, y no habiendo pruebas que desacrediten lo expuesto en el considerando que antecede, por lo tanto, resulta procedente aprobar la adopción plena de la menor de edad a quien se le resguarda su identidad bajo las iniciales A.J.N.F., con los

efectos que establece el artículo 403 del Código Civil vigente en el Estado; al efecto, queda extinguido todo lazo jurídico con la familia consanguínea; pasando la citada menor adoptada a ser un miembro más en la familia de los adoptantes como si fuese hija biológica; adquiriendo el adoptado y los adoptantes un verdadero lazo de parentesco, con todos los derechos y obligaciones que la ley establece a favor de los hijos y de los padres. Por lo anterior, se autoriza que en lo sucesivo, la menor lleve el nombre *********, esto a partir de la fecha en que cause ejecutoria la presente resolución.

VIII. Ejecutoriada que sea esta resolución, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 105, 112, 113, 144 y 402 del Código Civil del Estado, remítanse copias certificadas de la presente resolución al Oficial 01 del Registro Civil de Coatzacoalcos, estado de Veracruz, de Ignacio de la Llave, ante quien se levantó el acta de nacimiento número 02585, a nombre de la menor de edad de identidad reservada bajo las iniciales A.J.N.F., asentada en el libro 11, con fecha de registro cinco de junio de dos mil catorce, para que realice en la citada acta de nacimiento las anotaciones de rigor y levante el acta de adopción plena respectiva en los términos de que establece el artículo 113 y

144 del Código Civil en vigor, debiendo asentar en la citada acta de adopción como nombre de la menor adoptada el de ***** con fecha y lugar de nacimiento, el 22 de mayo de 2014, en Coatzacoalcos Veracruz, de nacionalidad Mexicana, y con domicilio en el Andador Tordos, departamento 101, manzana L., lote 6, de Infonavit Deportiva, municipio de Cárdenas, Tabasco; así como los nombres de los adoptantes, siendo estos los señores ***** casados, de nacionalidad mexicana, con domicilio en el Andador Tordos, departamento 101, manzana L., lote 6, de Infonavit Deportiva, municipio de Cárdenas, Tabasco, así como los datos esenciales de la resolución que autoriza la adopción.

En virtud de que el domicilio del Oficial 01 del Registro Civil de Coatzacoalcos, Veracruz, se encuentra fuera de la jurisdicción de este Juzgado, de conformidad con los numerales 143 y 144 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de Tabasco, gírese atento exhorto al Juez Competente de la ciudad de Coatzacoalcos, estado de Veracruz, de Ignacio de la Llave, para que en auxilio y colaboración de este Juzgado, ordene a quien corresponda de cumplimiento a lo ordenado en el párrafo que antecede.

Por lo expuesto y fundado y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 324 y 730 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el estado es de resolver, y se;

RESUELVE

PRIMERO. Ha procedo la vía.

SEGUNDO. Por las razones expuestas en esta sentencia, se aprueba la adopción plena de la menor de edad de identidad reservada bajo las iniciales A.J.N.F., con los efectos que establece el artículo 403 del Código Civil vigente en el Estado.

TERCERO. Queda extinguido todo lazo jurídico con la familia consanguínea del menor de edad, pasando la niña adoptada a ser un miembro más en la familia de los adoptantes como si fuese hija biológico; adquiriendo la adoptada y los adoptantes un verdadero lazo de parentesco, con todos los derechos y obligaciones que la ley impone a los padres e hijos.

CUARTO. Se autoriza que en lo sucesivo el menor lleve el nombre de *********, esto a partir de la fecha en que cause ejecutoria la presente resolución.

QUINTO: Ejecutoriada que sea esta resolución, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 105, 112, 113, 144 y 402 del Código Civil del Estado, remítanse copias certificadas de la

presente resolución al Oficial 01 del Registro Civil de Coatzacoalcos, estado de Veracruz, de Ignacio de la Llave, ante quien se levantó el acta de nacimiento número 02585, a nombre de la menor de edad de identidad reservada bajo las iniciales A.J.N.F., asentada en el libro 11, con fecha de registro cinco de junio de dos mil catorce, para que realice en la citada acta de nacimiento las anotaciones de rigor y levante el acta de adopción plena respectiva en los términos de que establece el artículo 113 y 144 del Código Civil en vigor, debiendo asentar en la citada acta de adopción como nombre de la menor adoptada el de ***** con fecha y lugar de nacimiento, el 22 de mayo de 2014, en Coatzacoalcos, Veracruz, de nacionalidad Mexicana, y con domicilio en el Andador Tordos, departamento 101, manzana L., lote 6, de Infonavit Deportiva, municipio de Cárdenas, Tabasco; así como los nombres de los adoptantes, siendo estos los señores ***** casados, de nacionalidad mexicana, con domicilio en el Andador Tordos, departamento 101, manzana L., lote 6, de Infonavit Deportiva, municipio de Cárdenas, Tabasco, así como los datos esenciales de la resolución que autoriza la adopción.

En virtud de que el domicilio del Oficial 01 del Registro Civil de Coatzacoalcos Veracruz, se encuentra fuera de la

jurisdicción de este Juzgado, de conformidad con los numerales 143 y 144 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de Tabasco, gírese atento exhorto al Juez Competente de la ciudad de Coatzacoalcos, estado de Veracruz, de Ignacio de la Llave, para que en auxilio y colaboración de este Juzgado, ordene a quien corresponda de cumplimiento a lo ordenado en el párrafo que antecede.

SEXTO: Elaborada el acta de adopción correspondiente, háganse los trámites ante las dependencias respectivas, para hacerles de su conocimiento que la menor de edad de identidad reservada bajo las iniciales A.J.N.F., lleva por nombre *****

SÉPTIMO: Háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno y en su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente concluido.

Notifíquese **personalmente** y cúmplase.

Definitivamente juzgando lo resolvió, manda y firma la ciudadana el licenciado **HERIBERTO ROGELIO OLEDO FABRES,** Juez Primero Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial de Cárdenas, Tabasco, por y ante la Secretaria de Acuerdos licenciado **LETICIA ULIN BLE,** que autoriza y da fe.

En 20 de Agosto de 2020, se publicó la sentencia anterior,
en la lista que se fija en los tableros de aviso de este juzgado.

Conste.

L'HROF/dra

Se turno al actuario judicial en _____ Conste. Doy fe.